



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho de julio de dos mil veintitrés

A23-063

ASUNTO:

APELACIÓN AUTO – ordinario laboral

DEMANDANTES:

ALBEIRO ALEXANDER DURANGO en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores Alejandro y Julieta Durango Zapata respectivamente.

ANA ALICIA MOSQUERA CÓRDOBA

DEMANDADO:

INTERASEO S.A.S. E.S.P.

RADICADO:

05266-31-05-001-2023-00034-01

DECISIÓN:

CONFIRMA auto que resuelve sobre imposición de medida cautelar

Link:

[23-063 \(001-2023-00034\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la parte actora contra la decisión emitida el 21 de febrero de 2023 mediante la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado resolvió lo atinente a la imposición de una medida cautelar.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 25** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Pretende la parte actora que tras declararse la existencia de un contrato de trabajo a término fijo desde el 4 de junio de 2019 hasta la fecha, entre el señor **ALBEIRO ALEXANDER DURANGO** e **INTERASEO S.A.S.**, y que dicha sociedad es responsable por culpa patronal, se condene a pagar la indemnización plena de perjuicios en los montos que reseña, además de la indexación de las condenas y las costas del proceso.

En escrito separado solicitó *caución dineraria a órdenes del despacho por el 20% de las pretensiones de la demanda, la cual debe ser asumida por la demandada INTERASEO SAS ESP o si el juez lo estimare procedente, una menos gravosa o diferente de la solicitada*. La sustentó aduciendo que:

De acuerdo al literal C del artículo 590 del Código General del Proceso y las motivaciones de la sentencia C-043 de 2021, la medida cautelar procede por las siguientes razones:

1) Es una medida razonable que busca asegurar la efectividad de la pretensión, desarrollar los principios de eficacia de la administración de justicia, el derecho de las personas a acceder a ella, y contribuye a la igualdad procesal (artículo 13, 228, y 229 de la Constitución Política).

2) El trabajador y su familia tienen legitimación para solicitar la medida, dado que son los que sufrieron los perjuicios materiales e inmateriales derivados del accidente de trabajo.

3) El trabajador es un SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN (artículo 13. 47, 54, y 68 de la Constitución Política), que sufrió un perjuicio cierto, el cual sufrieron indirectamente su esposa e hijos (menores de edad) derivado del accidente de trabajo y su pérdida de capacidad laboral de 50.08%, calificada por la ARL, y que lo tiene en situación de invalidez. Dicha situación se presentó por la violación de los derechos a la protección y seguridad en el trabajo, y por tanto, a la integridad del trabajador, por parte de INTERASEO SAS ESP, dado que está documentado (en el informe policial y en las investigaciones internas de la empresa), que el vehículo que ocasionó el accidente, tenía un problema de frenos, que pudo haber sido precavido.

4) El proceso de responsabilidad por culpa patronal planteado, tiene apariencia de buen derecho, dado que se tiene probado el hecho (accidente), el daño (pérdida de capacidad laboral) y el nexo causal, pues el trabajador, en desempeño de su labor como operario de recolección y en cumplimiento de sus labores, sufrió un accidente de trabajo que ocasionó la amputación de su pierna izquierda, por la pérdida de control y de frenos del carro recolector de basura de la empresa INTERASEO SAS, identificado con las placas SXL 728, en las cuales no influyó el demandante de ninguna forma.

Prueba del buen derecho que le asiste a los demandantes es el fallo contravencional, proferido por la secretaría de Movilidad de Sabaneta el día 4 de diciembre de 2022, donde se declaró contravencionalmente responsable al conductor del vehículo, basado en la confesión que realizó, relativa a la falla de frenos del vehículo.

Se podrá decir que la imputación a la demandada es con CULPA PROBADA, sin embargo, se recuerda que tratándose de OMISIONES, es la parte demandada la que deberá probar que actuó con diligencia y cuidado, de acuerdo a la sentencia SL-1897-2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

5) Aunque no fue un tema analizado por la sentencia C-043 de 2021, las medidas cautelares innominadas derivadas de la responsabilidad patronal, igual que las derivadas de la responsabilidad civil contractual o extracontractual (Artículo 590, literal C), merecen similar protección por tratarse de un proceso que comparte los elementos de la responsabilidad.

Finalmente, se **aclara que no se está solicitando la medida cautelar del artículo 85A del Código Procesal del Trabajo, por una parte, porque el porcentaje de la caución que se puede solicitar en ese caso está entre el 30% y el 50%, el cual difiere del aquí solicitado, y por otra parte, porque dicha norma tiene requisitos distintos, como demostrar la insolvencia del demandado y que se encuentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, cuestión que no se aplica en el caso de la demandada INTERASEO SAS ESP.** (Resaltos de la Sala)

Mediante auto del 21 de febrero de 2023, al admitirse la demanda, el a quo resolvió desfavorablemente dicha súplica, decisión contra la que la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Adujo que NO observaba pruebas contundentes que demostrasen la configuración de la hipótesis planteada en la norma, que respaldaran la petición para decretar la medida solicitada, pues dada la

naturaleza excepcional de la medida preceptuada en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los supuestos de la norma requerían de una prueba contundente que indujera al juez a estimar una insolvencia o una difícil situación de la demandada, que imposibilitara la realización material de una condena.

Que aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-043 del 2021 declaró la exequibilidad condicionada de la referida norma, indicando que en el proceso ordinario laboral podrían solicitarse medidas cautelares innominadas conforme el artículo 590 numeral 1° literal c del CGP, sin que al habilitar la posibilidad de decretarse otras medidas hubiera modificado en lo demás la norma del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, siendo por tanto exigibles para el decreto de las medidas innominadas, el cumplimiento de los demás presupuesto contenidos en la norma.

Que además era una etapa primigenia de trámite, ni siquiera se había notificado la demanda, lo que generaría la imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa de la convocada a juicio, aunado a que no se había presentado prueba sumaria de las actuaciones de la demandada las cuales comportaran indicios de actos tendientes a insolventarse.

Es así como concluyó que forzoso resultaba decretar la medida cautelar solicitada, máxime si no se podía convocar a la audiencia de que para tal fin regulaba el artículo 85 A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, denegando de esta manera la medida cautelar solicitada.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDANTE

Tras reiterar cual era la medida pretendida, caución dineraria del 20% de las pretensiones de la demanda, expresó que la misma era razonable, legítima y el proceso tenía apariencia de buen derecho, satisfaciéndose los requisitos de procedibilidad para su decreto.

Aclaró que NO estaba solicitando la medida cautelar regulada en el art. 85A del Código Procesal del Trabajo, adicionado por el artículo 37A de la Ley 712 de 2001. No obstante, destaca que el despacho la negó considerando que no se probó la insolvencia o difícil situación económica de la demandada, como requisito para la aplicación de una medida cautelar innominada, porque interpretó que la sentencia C-043 de 2001, no había exceptuado el anterior requisito contenido en el aludido art. 85 A, desconociendo la interpretación correcta, pues se reconoció la posibilidad de aplicar, por remisión, lo previsto en el CGP sin depender de los requisitos de procedibilidad reseñados en la norma laboral. En dichos términos solicita se revoque el auto que negó la medida innominada y en su lugar se acceda a la misma.

2.3. ALEGATOS

Ninguna de las partes presentó alegatos.

3. CONSIDERACIONES:

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 7º del artículo 65 del C.P.T y la SS, es apelable el auto que *decida sobre medidas cautelares*.

Aclarado lo anterior, comportará el punto de partida lo normado en el art. 85 A del CPT y la SS, cuyo tenor es:

ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 37-A de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> **Cuando el demandado**, en proceso ordinario, **efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia**, o cuando el juez considere que el demandado **se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre **el 30 y el 50%** del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se **citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial** al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual **las partes** presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. (Resaltos propios)

Por ello, de la norma aludida puede extraerse con facilidad la carga que en tal sentido le asiste a quien pretende beneficiarse de la imposición de la caución, pues debe indicar los motivos y hechos en que se funda su petición, los que a su vez deben ser de tal contundencia que impongan la necesidad de decretar tal medida cautelar, que busca no sólo garantizar el cumplimiento de una sentencia, sino además impedir que se *oiga* a la parte demandada, independientemente del estado en que se encuentre el proceso ordinario, pues su formulación no está atada a un momento particular de tal trámite.

Destáquese además, que conforme lo dispuso el a quo, y atendiendo la literalidad de la disposición existe una formalidad para resolver la procedencia de una medida cautelar. Es una norma procesal de orden público, que NO es dable desconocer y de su redacción claramente se desprende que debe

decidirse en audiencia una vez este trabada la Litis, pues no de otra forma podrían acudir *las partes* a la diligencia en mención.

NO obstante, el recurrente parte de una intelección disímil y aduce que NO es aquella la ley que gobierna el asunto, consecuentemente NO es el rito que debe seguirse, ni le compete al juez analizar las razones de una posible dificultad en el pago de una eventual condena, bien de acuerdo a la conducta del demandado o a la situación económica de éste.

Su interpretación se cimenta en el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando mediante sentencia C-043 de 2021 cuando declaró EXEQUIBLE de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad, en el entendido *que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal "c", numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso.*

En tal oportunidad precisó que:

Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. **Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**

Ahora bien, la exequibilidad condicionada de la norma demandada suple el déficit de protección de los justiciables de la jurisdicción ordinaria laboral en relación con la efectividad e idoneidad de las medidas cautelares que tienen para garantizar sus pretensiones. Pero es el legislador el llamado a diseñar un régimen de medidas cautelares fuerte que responda a las características especiales de quienes acuden ante la justicia laboral reclamando el reconocimiento de sus derechos.
(Resaltos de esta Sala)

El literal aludido del CGP, dispone que:

ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

(...) c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre **razonable** para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

Para decretar la medida cautelar el **juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**

Así mismo, el juez tendrá en cuenta **la apariencia de buen derecho**, como también la **necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida** y, si lo estimare procedente, **podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada.** El juez establecerá su

alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

(Resaltos de esta Sala)

Nótese como el artículo en comento previó que la solicitud de aquellas medidas podía solicitarse desde la presentación de la demanda, como en efecto aquí ocurrió; sin embargo, la sentencia de constitucionalidad expresamente introdujo al trámite laboral lo previsto en el literal C del aludido artículo 590 del CGP, no así la totalidad del mismo.

Empero, en gracia de discusión, a igual conclusión llegaría la Sala en torno a confirmar la decisión adoptada en primera instancia.

Y es que si bien el artículo en mención autoriza al juez a imponer cualquier tipo de medida, estima que la misma **debe ser razonable** para la protección del derecho en litigio o asegurar la efectividad de la pretensión. Esto dijo la Corte en la sentencia referida:

“(…) En la ya reseñada sentencia C-379 de 2004, esta Corporación señaló que la razón de ser de la medida “es precisamente evitar el desconocimiento de la sentencia, pues cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse, podrá el juez imponer la caución, garantizando el cumplimiento de la misma”.

En efecto, dijo la Corte, lo que busca la norma es “asegurar que quien es demandado, cumpla a cabalidad con las resultas del proceso, y si , **después de valorar las pruebas**, el juez estima procedente decretar la medida cautelar, necesario es, que efectivamente se preste, pues de lo contrario, la sentencia podría quedar en el vacío, y no tiene sentido que quien se somete a un largo procedimiento con el fin de que se le reconozcan sus derechos prestacionales, no pueda finalmente ver materializada su pretensión”

(…) En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que **el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga**. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

(…) Así, la referida interpretación judicial del artículo acusado aumenta significativamente la garantía del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de los justiciables del proceso laboral, pues para decretar la medida cautelar innominada el juez seguirá los parámetros establecidos por el art. 590 del CGP. Con esto se superan la desventajas que los demandantes señalaban respecto del art. 37A de la Ley 712 de 2001, referidas (i) al listado de medidas disponibles, (ii) su efectividad, (iii) el estándar para decretarlas y (iv) el plazo para resolverlas. Sumado a ello, este entendimiento de la norma es conforme con los principios de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, el de contar con un recurso judicial efectivo y con el trato especial que la Constitución Política otorga a los derechos al trabajo y a la seguridad social, tanto en su dimensión sustancial como procedimental.

(...) Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre **razonable** para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. **Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**

Ahora bien, la exequibilidad condicionada de la norma demandada suple el déficit de protección de los justiciables de la jurisdicción ordinaria laboral en relación con la efectividad e idoneidad de las medidas cautelares que tienen para garantizar sus pretensiones. Pero es el legislador el llamado a diseñar un régimen de medidas cautelares fuerte que responda a las características especiales de quienes acuden ante la justicia laboral reclamando el reconocimiento de sus derechos. (Resaltos propios)

En tal sentido, la medida cautelar, innominada o no, procede en los eventos donde el juez advierta los siguientes comportamientos del demandado:

- (i) cuando efectúe actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia,
- (ii) o cuando se encuentre en “graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.

Pero para arribar a dicha conclusión, debe efectuarse una valoración previa que permita, tras el análisis de algunos medios, encontrar acreditado por lo menos una de las dos situaciones descritas, empero, concomitantemente, el operador jurídico también debe apreciar otra serie de factores como la legitimación o interés para actuar de las partes, **la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho**, el cual debe tener apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pues bien puede el fallador decretar una menos gravosa que la solicitada.

Bajo este esquema normativa, descendiendo al caso puesto en consideración de la Sala, observa la Sala que ninguna actuación de la sociedad demandada cimenta la procedencia de la imposición de la caución; por el contrario, al formularse tal súplica se aclara que INTERASEO ni es insolvente, ni se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Además de ello aquella petición se edifica en que el trabajador es sujeto de especial protección, que existe apariencia de buen derecho por las razones que reseña, PERO nada identifica respecto de que el derecho este siendo **amenazado o vulnerado**, comportando este uno de los requisitos que contempla la norma, tornándose improcedente su imposición.

Ahora, ello NO impide que si posteriormente se verifican los supuestos que consagra la norma, se eleve nuevamente dicha súplica.

En consecuencia, en atención a las razones esgrimidas, se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada.

Se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante por NO haber tenido éxito en el recurso. Se fijará como agencias en derecho la suma de \$100.000.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE**

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 21 de febrero de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, a través de la cual resolvió lo atinente a la imposición de una medida cautelar, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **ALBEIRO ALEXANDER DURANGO** en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores Alejandro y Julieta Durango Zapata respectivamente, y la señora **ANA ALICIA MOSQUERA CÓRDOBA**, contra la sociedad **INTERASEO S.A.S. E.S.P.**, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.


SEGUNDO: costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por

ESTADOS No. 130 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 31 DE JULIO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>